

Behatokia

Atacar por el flanco

EN un par de meses, el debate sobre la crisis económica ha dado un vuelco espectacular. La respuesta oficial a “¿de qué va la cosa?”, pregunta capital para identificar las cuestiones centrales y priorizar las acciones, ha cambiado radicalmente, como si nos encontráramos en dos crisis diferentes. Antes, el problema era la crisis financiera y todas las energías de los gobiernos se orientaban a encontrar nuevas reglas de comportamiento en los mercados financieros, reforzando los sistemas de supervisión, e incluso nacionalizando algún que otro banco.

Pero en las últimas semanas el problema parece centrarse en el nivel del déficit fiscal, y de rebote, en la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Al menos en Europa, donde la Comisión Europea, tras pasar de puntillas sobre el fracaso de la Estrategia de Lisboa, que aspiraba a convertir a la UE en la región mundial de mayor crecimiento, mayor creación de empleo y mayor nivel de innovación para el año 2010, acaba de publicar este mes su nueva estrategia, *Europa 2020*, en la que entre otras cosas reafirma que “el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece el camino correcto” para salir de la crisis, e invita a los gobiernos a “tomar decisiones duras” en materia de “importantes reformas estructurales en especial de las pensiones, la atención sanitaria, la protección social y los sistemas educativos”.

Esta visión es resultado de la falta de voluntad de los gobiernos para adoptar las medidas adecuadas para sencillamente prohibir los mercados especulativos. El G-20 y las expectativas que algunos habían puesto en la voluntad de acción concertada de los gobiernos mundiales ha pasado a mejor vida. Pues si bien Estados Unidos y Gran Bretaña estarían intentando proteger su lucrativo sector financiero (el estado de Delaware o las islas Vírgenes son dos de los principales paraísos fiscales en Estados Unidos y la City de Londres gestiona tres cuartas partes de los fondos de cobertura –especuladores– de Europa), en Francia o Alemania no se dispone de un modelo de gestión alternativo que ponga el objetivo de creación de riqueza a través del trabajo por encima de la defensa de la integridad y estabilidad del valor de la riqueza financiera.

Mientras, los agentes financieros han evolucionado, convirtiéndose en un factor de desestabilización de la gestión del endeudamiento público. Finalizada la orgía de las *subprimes*, el negocio se ha trasladado a los títu-



El debate sobre la crisis ha dado un vuelco espectacular, del problema financiero se ha pasado al problema de la protección social, de atacar la situación de frente, a buscar acciones (y daños) colaterales. Toda la fanfarria sobre la insostenibilidad es una cortina de humo.

POR JOAQUÍN ARRIOLA (*)

los del Estado. Y como las tasas de rentabilidad están en mínimos históricos, la especulación consiste en atacar la credibilidad de la garantía pública. No importan los argumentos –por lo general poco rigurosos– sino el volumen del ruido mediático para lograr el objetivo de aumentar la rentabilidad obtenida en tal o cual país, obligando a éste a pagar mayores intereses para colocar sus títulos de deuda pública.

El Gobierno español no sabe ni quiere apartarse de la ortodoxia bruselese. Tras dedicar el año pasado más de 25.000 millones de euros al rescate de los bancos, 12.000 millones a apoyar la mejora de los beneficios de las empresas y 11.000 millones a crear empleo temporal (el tamaño de cada paquete muestra a las claras las prioridades del gobierno), ahora se prepara para reducir en los próximos tres años el gasto público en 43.000 millones de euros, reduciendo en unos 20.000 millones el gasto en salarios, en 10.000 millones el gasto corriente, otros tantos en reducir las inversiones públicas y unos 5.000 en recorte en las subvenciones. Estos son los compromisos del programa de estabilidad 2010-2013, pasos obligados para respetar el “camino correcto” definido por la UE para salir de la crisis: menos gasto, menos inversión, peores servicios públicos, mayor presión en favor de la privatización. Todo a mayor gloria de la *credibilidad* ante los financiadores internacionales.

Que el objetivo sea reducir la carga de la deuda (3,1% del PIB en intereses) está bien. Que el resultado vaya a ser una profundización de la decesión porque el mercado se muestre incapaz de sustituir al gasto público en la dinamización de la economía, y en consecuencia el déficit en lugar de reducirse aumente aun más por la consiguiente disminución de los ingresos, es algo que no forma parte de las previsiones del Gobierno, y tampoco de la Comisión Europea. Porque todos confían en que al mismo tiempo que se pro-

duce el ajuste fiscal, la banca vuelva a otorgar crédito a la economía y las empresas puedan volver a financiar sus operaciones de inversión y de gasto corriente, y supuestamente a crear empleo. Y si confían en ello es porque se espera sanear los activos bancarios de productos tóxicos y frágiles, mediante un masivo traslado de renta desde los ciudadanos, convertidos en los nuevos deudores globales, hacia las instituciones financieras, por medio de la ampliación del negocio de las pensiones privadas.

No es por casualidad que en documento sobre revisión del Pacto de Toledo, el Gobierno español se queje de “la falta de interés del mercado por este tipo de productos”, cuestión que achaca a que “el sistema público cubre de forma muy satisfactoria a la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena y de forma menos intensa a los trabajadores por cuenta propia”. Invita el documento a “reflexionar sobre qué colectivos merecería la pena que se incorporaran a la previsión social complementaria” (es decir, a las pensiones privadas), proponiendo actuar para que sean las amas de casa y los trabajadores de mayores salarios, por la vía de dar nuevos incentivos fiscales y reducir las pensiones máximas en el sistema público. Este es el verdadero problema del sistema de pensiones de la Seguridad Social y toda la fanfarria sobre la insostenibilidad no deja de ser una cortina de humo. Que las pensiones privadas no puedan garantizar una rentabilidad mayor que las públicas, no entra en el debate.

En el torbellino del pensamiento único sobre la crisis y en materia económica, sólo salen inmaculados los que no piensan

Esta orientación de la política económica es consecuencia del control político e ideológico del capital financiero, que siempre se ha ocupado de tener bien representados sus intereses en los gobiernos de turno. Por ejemplo, el nuevo jefe de la agencia responsable de gestionar la deuda nacional griega, Petros Christodoulou, fue jefe de productos derivados en JP Morgan y anteriormente trabajó para Goldman Sachs, la entidad a la que se mira como responsable del caos en el que se ha sumido la gestión de la deuda pública griega. Ahí están las palabras del ministro español de industria, Miguel Sebastián: “Los planes de pensiones no deben ser tan malos cuando todos los gobiernos los han bonificado fiscalmente de forma generosa”, que se insertan en el objetivo de ampliar el negocio financiero de las pensiones promovido por el Gobierno español.

En las propuestas del Gobierno para alcanzar un acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, se señala como un reto “resolver el muy grave problema del desempleo, y resolverlo de una vez por todas”. Pero la contundencia de esta frase no se refleja en las propuestas, pues de las 55 medidas sugeridas, ninguna supone un compromiso concreto de creación de empleo, que se plantea a lo sumo como resultado indirecto de medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas y del flujo de crédito oficial a las empresas. Eso sí, se vuelve a insistir en que “el rápido crecimiento de la deuda pública exige un esfuerzo de austeridad”. Es decir, de reducción del empleo público.

La incuria con la que se está tratando el patrimonio público contrasta con la desgana que muestran los gobiernos para actuar en el frente financiero. En el debate político no hay lugar para argumentar contra la privatización del crédito internacional, origen de todo este desbarajuste. Ni para defender la mayor eficacia de la gestión pública en la satisfacción de las necesidades generales (desde la seguridad pública o la justicia a los hospitales, las viviendas y las pensiones), que por no necesitar de compensaciones entre individuos ni grupos específicos, y estar aceptado que sean de acceso universal, se benefician de las economías de escala crecientes derivadas de la gestión estatal. En el torbellino del pensamiento único, sólo salen inmaculados los que no piensan. Y a todo esto: ¿alguien sabe qué piensa el Gobierno vasco?

* Profesor de Economía Política de UPV/EHU

Especialistas en descanso

Pague en 12 meses sin intereses

Grandes descuentos por cambio de exposición



Colchonería Arteaga

Seminario de Derio, DERIO • Tfno. 944 545 147

Colchonería Leioa

La Avanzada 80 (Dirección Bilbao) LEIOA • Tfno. 944 316 516

Colchonería Lotara

Errebal, 19 Eibar • Tfno. 943 202 784